

## RESOLUCION N. 00165

### “POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES”

#### LA DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En uso de las facultades legales conferidas por la Ley 99 de 1993, con fundamento en la Ley 1333 de 2009, la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviembre de 2006, el Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009 modificado por el Decreto Distrital 175 del 04 de mayo de 2009 y en especial, las delegadas en la Resolución 01865 del 06 de julio de 2021 de la Secretaría Distrital de Ambiente y,

#### CONSIDERANDO

##### I. ANTECEDENTES

El día 26 de noviembre de 2008, la Policía Nacional – SIJIN MEBOG, en las bodegas de carpa de la empresa 472, mediante acta de incautación No. 003, procedió a formalizar la diligencia de incautación preventiva de ciento setenta y ocho (178) especímenes de fauna silvestre en seco denominados Gasterópodos (Varias especies – conchas), seis (6) especímenes de fauna silvestre en seco denominadas Bivalvos (Tellina sp – conchas) y trece (13) especímenes de fauna silvestre muertos y conservados en alcohol denominados Gasterópodos (Varias especies) con destino a Eslovaquia y Japón, remitidos por el señor **ALAN PIERRE INFANTE PINZON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.719.719, quien aparece como remitente en la guía de servicio de envío N° RB004948841CO (ver acta de incautación No. 003, folio 2), por no contar con la documentación requerida que autoriza su exportación.

De igual forma el día 26 de noviembre de 2008, la Policía Nacional – SIJIN MEBOG, en las bodegas de carga de la empresa 472, mediante acta de incautación No. 004, procedió a formalizar la diligencia de incautación preventiva de cincuenta y tres (53) especímenes de fauna silvestre muertos, denominados Caracoles (varias especies – conchas) y seis (6) especímenes de fauna silvestre en seco denominados Bivalvos (Tellina sp – conchas) con destino a Japón y remitidos por el señor, **ALAN PIERRE INFANTE PINZON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.719.719, quien aparece como remitente en la guía de servicio de envío N° RB004948838CO (ver acta de incautación No. 004, folio 6), por no contar con la documentación requerida que autoriza su exportación.

Mediante memorando DECSA-GFFS, con radicado No. 2009IE3511 del 11 de febrero de 2009, el jefe de la Oficina de Control Flora y Fauna remitió al Director Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, la documentación donde se encuentra soportada la incautación realizada por la Policía Nacional – SIJIN MEBOG.

Que el Auto No. 5435 del 4 de noviembre de 2009, expedido por el Director de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, inició proceso sancionatorio de carácter ambiental contra el señor **ALAN PIERRE INFANTE PINZON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.719.719.

El anterior Auto se notificó personalmente al señor **ALAN PIERRE INFANTE PINZON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.719.719, el día 24 de agosto de 2010.

Posteriormente y mediante Auto 5436 del 4 de noviembre de 2009, la Dirección de Control Ambiental, formuló un único cargo al señor **ALAN PIERRE INFANTE PINZON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.719.719, y procedió a conceder de conformidad con el artículo 207 del Decreto 1594 de 1984, los diez (10) días para la presentación de los respectivos descargos en los siguientes términos:

**“Cargo único:** *Por violar presuntamente el artículo 2011 y 214 del Decreto 1608 de 1978 y las Resoluciones 1367 de 2000 y 1263 de 2006 respectivamente.”*

**“ARTICULO TERCERO** *De conformidad con el Artículo 207 del Decreto 1594 de 1984, y en cumplimiento del debido proceso, se concedió un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del auto mencionado, para que el presunto infractor, directamente o por medio de apoderado, presentara sus descargos por escrito, aportara y solicitara la práctica de las pruebas que consideraran pertinentes.”*

El anterior Auto se notificó personalmente al señor **ALAN PIERRE INFANTE PINZON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.719.719, el día 24 de agosto de 2010.

El presunto infractor mediante escrito con radicado No. 2010ER58081 del 25 de octubre de 2010, presentó extemporáneamente descargos, toda vez que el acto administrativo le fue notificado personalmente el 24 de agosto de 2010, por lo tanto contaba con diez (10) días para presentar los descargos, y observancia a la suspensión de los términos establecidos en la Resolución 6359 del 31 de agosto de 2010, y la Resolución 6709 del 29 de septiembre de 2010 tenía hasta los días 4 y 5 de octubre del mismo año.

La Dirección de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante la Resolución No. 5865 del 11 de octubre de 2011, determinó en la parte resolutive lo siguiente:

**“ARTICULO PRIMERO:** *Declarar responsable al señor **ALAN PIERRE INFANTE PINZON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.719.719, del cargo formulado a través del Auto N° 5436 del 4 de noviembre de 2009 por violar presuntamente el artículo 211 y 214 del Decreto 1608 de 1978 y las Resoluciones 1367 de 2000 y 1263 de 2006 respectivamente.”*

**ARTICULO SEGUNDO:** *Imponer sanción consistente en la multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes, correspondiente a dos millones ciento cuarenta y dos mil*

*cuatrocientos pesos m/cte (\$ 2.142.400). La anterior decisión se notificó personalmente al señor ALAN PIERRE INFANTE PINZON, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.719.719, el día 20 de octubre de 2011.”*

Dentro del término legal, el día 27 de octubre de 2011, a través de escrito con radicado No. 2011ER137599, el señor **ALAN PIERRE INFANTE PINZON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.719.719, interpuso recurso de reposición contra la Resolución No. 5865 del 11 de octubre de 2011.

El día 28 de diciembre de 2012, a través de la Resolución No. 01854 se revocó la decisión adoptada en el Auto No. 5435 del 4 de noviembre de 2009, por cual se inició un proceso sancionatorio y todas las que dependieran de ella, por cuanto se terminaron según lo preceptuado por el Decreto 1594 de 1984, esto es, se adelantó el proceso sancionatorio administrativo ambiental con una Ley derogada vulnerándose así el derecho al debido proceso. La citada providencia se notificó personalmente el 18 de febrero de 2013.

Igualmente, la citada Resolución dispuso en su artículo segundo, devolver el expediente al área jurídica en aras de iniciar el procedimiento sancionatorio ambiental de conformidad con la Ley 1333 de 2009.

Que posteriormente, mediante el Auto No. 04155 del 7 de julio de 2014, se dio inicio al proceso sancionatorio administrativo de carácter ambiental, en contra del señor **ALAN PIERRE INFANTE PINZON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.719.719, con el fin de verificar los hechos u omisiones constituyentes de infracción a las normas ambientales.

Que el citado auto fue notificado por aviso el día 01 de septiembre de 2014, quedando con constancia de ejecutoria el día 02 de septiembre de 2014.

Así mismo comunicado a la Procuraduría General de la Nación, mediante radicado 2014EE114467 del 10 de julio de 2014.

## II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que previo a resolver el presente asunto, conviene hacer las siguientes precisiones de orden jurídico:

Teniendo en cuenta que la situación irregular que dio origen a las presentes diligencias fue conocida por esta entidad el **26 de noviembre de 2008**, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1333 de julio 21 de 2009, resulta procedente establecer como primera medida, que la normativa aplicable al presente caso es la prevista en el Decreto 01 de 1984 y la Ley 99 de 1993.

Consecuentemente, se advierte que los hechos materia de investigación son de naturaleza y de ejecución instantánea, dado que su consumación tuvo lugar en un único momento, claramente

determinado en el tiempo, el cual marca el punto de referencia y de partida para el cómputo del término de caducidad.

A partir de lo expuesto, se hace necesario precisar cuál es el término de caducidad aplicable al presente caso, teniendo en cuenta que los hechos irregulares objeto del proceso ocurrieron antes de la entrada en vigor de la Ley 1333 de 2009. Para tal efecto acudiendo a la norma en comento, se procede al análisis del régimen de transición allí previsto, el cual establece:

**“ARTÍCULO 64. TRANSICIÓN DE PROCEDIMIENTOS.** *El procedimiento dispuesto en la presente ley es de ejecución inmediata. Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984.”*

En este sentido, en materia procesal y de cara a la transición de procedimientos previstos en el artículo 64 de la ley 1333 de 2009, se advierte que, para el presente caso se surtió la etapa de inicio con posterioridad a la entrada en vigor de la ley en mención, razón por la cual se concluye que en el sub júdice es aplicable el procedimiento establecido en dicha normatividad.

En efecto, las normas procesales son de aplicación inmediata, salvo que el Legislador establezca una excepción. Al respecto, el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dispuso:

*"Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.*

**Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones". (...)** (Subrayado y negrillas fuera de texto)

Teniendo en cuenta lo anterior, debe tenerse presente que la naturaleza del hecho irregular que dio lugar al proceso sancionatorio ambiental, es el punto de referencia y de partida para el cómputo de la caducidad, lo cual significa que, por tratarse de un hecho de ejecución instantánea, la caducidad opera desde el mismo momento de su ocurrencia o desde la fecha en que la autoridad ambiental tuvo conocimiento del suceso, tal y como lo ha reafirmado en múltiples pronunciamientos la doctrina y la jurisprudencia.

Así las cosas, y en armonía con lo dispuesto en el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que en el presente caso esta Secretaría conoció del hecho irregular el **26 de noviembre de 2008**, fecha para la cual no se encontraba en vigente la Ley 1333 de 2009, cuyo artículo 10 estableció un término de caducidad de 20 años, en

su lugar, regía el **artículo 38 del Decreto 01 de 1984**, que fijó el término de caducidad de la facultad sancionatoria en **tres (3) años**.

En definitiva, al amparo del **DEBIDO PROCESO** y del **PRINCIPIO DE LEGALIDAD** a que se refiere el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012 que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se concluye que si se trata de un hecho de ejecución instantánea o de ejecución continuada cuyo último acto se haya materializado ANTES del 21 de julio de 2009, el término de caducidad comenzó a correr al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984 (3 años), como en el sub lite, pues se trata de hechos irregulares acaecidos antes de que entrara en vigencia la caducidad del artículo 10 de la Ley 1333 de 2009, no siendo viable jurídicamente aplicar en forma retroactiva la caducidad de veinte (20 años) prevista en dicha norma.

Aunado a lo anterior, debe considerarse que a más de ser la caducidad en términos generales un fenómeno jurídico de carácter procesal, en materia administrativa genera la pérdida de competencia de la Administración para resolver sobre un determinado asunto, de suerte que dar aplicación retroactiva a la caducidad de 20 años prevista en la Ley 1333 de 2009 respecto de situaciones que se consumaron antes de su entrada en vigor, implicaría desconocer la máxima del debido proceso constitucional, a cuyo amparo *"nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente"*, y soslayar por completo el principio de legalidad que rige por excelencia las actuaciones administrativas.

Al respecto, es necesario indicar, que la caducidad de la acción reviste carácter de orden público, pues su establecimiento obedece a razones de interés general que imponen la obligación de obtener en tiempos breves la definición de ciertos derechos, lo que le otorga dinámica a la actividad administrativa, al paso que le imprime un importante grado de seguridad jurídica. Ahora bien, en materia sancionatoria, impide toda posibilidad de iniciar o proseguir una determinada actuación, dado que se trata de una institución procesal que ataca el derecho de acción, cuyo efecto inmediato es la imposibilidad de su ejercicio.

Así entonces, en relación con la disyuntiva que impone analizar si debe o no darse aplicación retroactiva, en el caso que nos ocupa, al término de caducidad de los 20 años previsto en la Ley 1333 de 2009, se deben analizar las disposiciones contenidas en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012; atendiendo las reglas generales de interpretación ante conflictos derivados de la aplicación de la ley procesal en el tiempo, las mismas que permiten concluir que en el presente caso el término de caducidad a aplicar es señalado en el **artículo 38 del Decreto 01 de 1984**.

Frente al fenómeno de la caducidad, la H. Corte Constitucional, mediante Sentencia T-433, de la Sala Sexta de Revisión de fecha 24 de junio de 1992, ha dicho:

*"Consiste la caducidad en el fenómeno procesal de declarar extinguida la acción por no incoarse ante la jurisdicción competente dentro del término perentorio establecido por el ordenamiento jurídico para ello. Opera la caducidad ipso jure, vale decir que el juez puede*

*y debe declararla oficiosamente cuando verifique el hecho objetivo de la inactividad del actor en el lapso consagrado en la ley para iniciar la acción. Este plazo no se suspende ni interrumpe, ya que se inspira en razones de orden público, lo cual sí ocurre en tratándose de la prescripción civil, medio éste de extinguir las acciones de esta clase.*

*En este orden de ideas y entendida la caducidad como un término para realizar, un acto administrativo que ponga fin a la actuación sancionatoria, con el objetivo de no dejar en suspenso por mucho tiempo la ejecución del acto de que se trata; de conformidad con lo antes expuesto se procederá al análisis del fenómeno de la caducidad, al amparo del artículo 38 del Decreto 01 de 1984, el cual establece:*

*“Caducidad respecto de las sanciones. ARTÍCULO 38. Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas (...).”*

Igualmente, el Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, en el cual precisó:

*“(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que, salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caducas a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, por lo tanto, el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor. (...)”*

Frente al término establecido en el referido artículo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

*“(...) Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: “ (...) \*Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa<sup>6</sup>(...)” (Subrayado fuera de texto).*

Para el caso que nos ocupa, se deduce que la autoridad ambiental competente para la fecha, disponía de un término de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la presente actuación, esto es, desde el **26 de noviembre de 2008**, fecha de la verificación de los hechos, que dieron lugar a la presente actuación, y que se relacionan con el presunto incumplimiento de la normatividad ambiental. Por tanto, la autoridad ambiental disponía hasta el día **25 de noviembre de 2011** para la expedición del acto administrativo que resolvería de fondo la actuación administrativa frente al proceso sancionatorio, trámite que no se surtió, por lo anterior, de tal modo que operó el fenómeno de la caducidad.

Es por lo anterior que se procederá a declarar la caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y, en consecuencia, se ordenará el archivo de las diligencias administrativas contenidas en el expediente **SDA-08-2009-1555**.

### III. COMPETENCIA DE ESTA SECRETARÍA

En relación con la competencia de esta Entidad, es preciso señalar que mediante el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, modificado parcialmente por el Acuerdo Distrital 546 de 2013, se modificó la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades del Distrito, dentro de las cuales se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente, a la cual se le asignó, entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorgan o niegan las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de este ente administrativo, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

En virtud del Decreto Distrital 109 del 16 de marzo de 2009, modificado parcialmente por el Decreto 175 del 04 de mayo de 2009, se estableció la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Ambiente, asignando las funciones de sus dependencias dentro de las cuales, está la de suscribir los actos administrativos por medio de los cuales la Secretaría otorga, concede, niega, modifica los permisos y/o autorizaciones ambientales.

De conformidad con lo contemplado en los numerales 6 y 9 del Artículo 2 de la Resolución 01865 del 06 de julio de 2021 de la Secretaría Distrital de Ambiente, por la cual el Secretaría Distrital de Ambiente delega en el Director de Control Ambiental, entre otras funciones, la de:

*“6. Expedir los actos administrativos que declaran la caducidad administrativa en los procesos sancionatorios.*

Que, en mérito de lo expuesto, el Director de Control Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C.,

## RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR LA CADUCIDAD** de la facultad sancionatoria dentro del proceso adelantado por el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente – DAMA, hoy la Secretaría Distrital de Ambiente, en contra del señor **ALAN PIERRE INFANTE PINZON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.719.719, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto y que constan en las diligencias contenidas en el expediente **SDA-08-2009-1555**.

**ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR** esta Resolución al señor **ALAN PIERRE INFANTE PINZON**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.719.719, de acuerdo a la última dirección que registra el expediente; ubicado en la Carrera 55 A No. 163 – 35 Torre 7 Apto. 716, de esta Ciudad, de conformidad con los artículos 44 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984.

**ARTÍCULO TERCERO:** Enviar copia de la presente Resolución a la Oficina de Control Disciplinario Interno, para lo de su competencia.

**ARTÍCULO CUARTO:** Publicar la presente Resolución en el boletín que para el efecto disponga la entidad. Lo anterior en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

**ARTÍCULO QUINTO:** Comunicar la presente Resolución a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009.

**ARTÍCULO SEXTO:** Cumplido lo anterior archivar definitivamente las diligencias contenidas en el expediente **SDA-08-2009-1555**, como consecuencia de lo previsto en el artículo primero de la presente providencia.

**ARTÍCULO SEPTIMO:** Contra la presente Resolución procede recurso de reposición el cual deberá interponer ante el Despacho de esta Secretaría, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 y 51 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), en concordancia con el artículo 308 de la ley 1437 de 2011.

**NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE**





**CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR**  
**DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL**

**Elaboró:**

JORGE FRANCISCO ARIAS HINCAPIE

CPS:

CONTRATO 2021-1339  
DE 2021

FECHA EJECUCION:

11/02/2022

**Revisó:**

ANDREA NATALIA ANTONIO FERNANDEZ

CPS:

CONTRATO 2021-1269  
DE 2021

FECHA EJECUCION:

11/02/2022

**Aprobó:**

**Firmó:**

CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR

CPS:

FUNCIONARIO

FECHA EJECUCION:

15/02/2022